



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2018-00566-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO PUENTES GONZÁLEZ
DEMANDADO: BOGOTÁ D.C.- INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPAC-

En el presente asunto, **CARLOS ALBERTO PUENTES GONZÁLEZ** presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra de **BOGOTÁ D.C.- INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPAC-**, con el objeto de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

“PRIMERA- Se declare la nulidad de los oficios No. 2017EE13710 del 20 de noviembre de 2017, y 2018EE5763 del 26 de junio de 2018(...)”
SEGUNDA.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene al Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal “IDPAC”, a indemnizar, al señor CARLOS ALBERTO PUENTES GONZÁLEZ, por no haber sido posesionado, el día 7 de noviembre de 2013, en la Planta Temporal del IDPAC, de conformidad con los listados remitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil, mediante radicado No. 2013 ER 12998 del 7 de noviembre de 2013; a las 3:51 P.M, dirigido a la Doctora LAURA PATRICIA GARCÍA MEJÍA, quien en su momento era la Directora General del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal-IDPAC.
(...)”

Pues bien, analizada la integridad de la demanda, el escrito de subsanación y los demás documentos aportados a la actuación, se observa que no es posible avocar el conocimiento del medio de control, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

- 1. De los actos administrativos demandados No. 2017EE13710 del 20 de noviembre de 2017, y 2018EE5763 del 26 de junio de 2018.**

En cuanto a los actos administrativos susceptibles de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, recuerda el Despacho, que de acuerdo con lo preceptuado en la ley 1437 de 2011 en su artículo 43, solo los “*actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.*” son susceptibles de los medios de control estipulados en el C.P.A.C.A.

Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta como primera medida, que existen varias clases de actos administrativos que puede proferir la administración, a saber, **los actos de trámite o preparatorios, los definitivos y los de ejecución**, sin embargo, no todos son susceptibles de ser demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para estudiar su legalidad, pues para ello **deben contar con una condición “sine qua non”, y es que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica.**

En otras palabras, si los actos administrativos no son definitivos, es decir, si no contienen la manifestación de la voluntad de la administración con la cual se culmine con el procedimiento administrativo ante la entidad respectiva, tal como lo define el artículo 43 del C.P.A.C.A., no pueden demandarse bajo los medios de control que consagra la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda, en proveído adiado 25 de mayo de 2017, dentro del expediente 2012-00400, C.P. Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, hizo alusión a esta diferenciación entre las clases de actos administrativos, indicando lo siguiente:

*“Se ha entendido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración, en ejercicio de la función administrativa, orientada a producir efectos jurídicos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, y, por ende, susceptible del control jurisdiccional. También puede ser impugnado en sede administrativa a través de los recursos de la vía gubernativa o por revocación directa. Sobre este último aspecto, los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establecen que «No habrá recursos contra los actos de carácter general, ni contra los **de trámite, preparatorios, o de ejecución** excepto en los casos previstos en norma expresa» y «Por regla general, contra los actos **que pongan fin a las actuaciones administrativas** procederán los siguientes recursos: [...] Son **actos definitivos**, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla» (negrillas no son de los textos).*

*En este sentido, ha de comprenderse que el **acto de trámite** es aquel que no le pone fin a una actuación administrativa o asunto, sino que tiende a impulsarla hasta su culminación, mientras que el **definitivo** la resuelve de fondo y la termina. Al respecto, esta Corporación¹ ha sostenido:*
[...]

¹ Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, radicación número: 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008- 00027-00, consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, actor: Camilo Araque Blanco y otros.

La referida norma [art. 50 CCA] hace una distinción entre actos administrativos definitivos y los actos de trámite. Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras que los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo.

La calificación de un acto administrativo como acto definitivo o de trámite es fundamental para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo.
[...]"

Así pues, conforme a lo señalado por el H. Consejo de Estado, es claro que los actos de trámite o preparatorios, que simplemente buscan impulsar la actuación administrativa para que llegue hasta su culminación, no pueden ser demandados, en este caso, bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto no contienen en sí mismos una decisión definitiva frente al pedimento elevado por el interesado, lo cual impide que se realice un estudio de legalidad, pues no deciden el fondo del asunto y no producen efectos jurídicos definitivos, que como se dijo, es el requisito *sine qua non* para que se ejerzan las acciones legales respectivas, o los recursos en vía gubernativa que consagra el C.P.A.C.A.

Ahora bien, aun cuando la providencia traída a colación hace alusión al Decreto 01 de 1984, lo cierto es que la ley 1437 de 2011, también estableció en su artículo 75, que no habrá lugar a presentar recursos contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución, excepto los casos previstos en norma expresa.

En este orden de ideas, al analizarse los actos administrativos **No. 2017EE13710 del 20 de noviembre de 2017, y 2018EE5763 del 26 de junio de 2018**, objeto de nulidad en el presente asunto, es claro para el Despacho que se trata de actos de trámite, no susceptible de control jurisdiccional, por cuanto los mismos, informan al peticionario que la respuesta a la petición del asunto, ya había sido sufragada en oficios anteriores. Respuesta emitida en los siguientes términos: "*No es posible acceder a su solicitud de indemnización dado que, tal y como se le informó mediante oficio No. 2017ER2101 que dio respuesta al derecho de petición por usted interpuesto (...)*" (fls. 20 y 22).

Conforme a lo anterior, es claro que el acto acusado no está creando, modificando o extinguiendo derecho alguno al demandante, pues la entidad demandada no está negando ni tampoco accediendo a lo solicitado, pues como se dijo en líneas anteriores, la administración le informa al actor, que

la petición incoada, ya había sido resuelta mediante respuesta u oficio anterior.

Por tanto, este Despacho concluye que el referido oficio es un acto de trámite, por lo que el mismo no puede ser objeto de discusión dentro de la demanda, toda vez que **no se evidencia una respuesta que impida continuar con el asunto** y que por tal motivo convierta lo contenido en el oficio en una decisión definitiva.

Reitera el Despacho, que solo los actos definitivos que por sí mismos generan efectos jurídicos, son pasibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativo, junto con las decisiones que los modifican o confirman, con las cuales conforman la voluntad administrativa respecto un asunto particular, como lo enuncia el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del 20 de febrero de 2008, expediente 2002-03275 (15607) C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

Así las cosas, y como quiera que el acto acusado no contiene una decisión definitiva que permita a este Despacho Judicial realizar el control de legalidad que se pretende, de conformidad con lo establecido en numeral 3° del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho, **rechazará la demanda.**

En virtud de las antedichas consideraciones, este Despacho,



RESUELVE

PRIMERO.- RECHAZAR LA DEMANDA presentada por **CARLOS ALBERTO PUENTES GONZÁLEZ**, en contra de **BOGOTÁ D.C.- INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL-IDPAC-**, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.-Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y, a través de la Oficina de Apoyo, procédase al archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
JUEZ

 <p>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA</p> <p>Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior hoy 19 DE MARZO DE 2019, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)</p> <p> LIZZETH VIVIANA CÁNGREJO SILVA SECRETARIA</p>
